

Cómo pensarnos y redefinirnos

Una sociedad bifurcada por la violencia

Elizabeth Gallardo*



EL PERIÓDICO DEL PUEBLO ORIENTAL

La noción con la que la autora pretende acercarse a la comprensión del acontecer diario es la que refuerza el hecho de que inexorablemente nos encontramos bifurcados por la violencia, y cuando se refiere a la violencia trae a colación la violencia social, la violencia política, pero también la violencia discursiva con la que representamos y negamos al otro (es decir la forma en que vemos y nos dirigimos a los diferentes, a los “no nosotros”). En las líneas que siguen, explicará qué

considera como bifurcación de la violencia, las posiciones que como actores sociales nos han permitido relacionarnos ante ella, y aportará nociones que quizá coadyuven a una redefinición sobre la forma en la que nos hemos visto socialmente; además de sugerir acciones para revertir esta ecuación y trabajar en torno a la convivencia pacífica en el ser social y ser sociedad

Para la Real Academia de Lengua Española (RAE) la palabra bifurcación toma la acepción de “la división de una cosa en dos ramales, brazos o puntas y el lugar donde se produce esta división”.

En términos georreferenciales, simplemente podría dar una dirección indicando el lugar donde se produce esa división y dar la posibilidad de tomar una de las sendas que resulta de la incisión del camino.

No obstante, existe una paradoja cuando hablamos de una sociedad bifurcada por la violencia, pues al convertirse esta en un hecho cotidiano nos encontramos en un callejón sin salida al constatar que ni los ordenamientos sociales, ni las acciones institucionales logran generar un orden alternativo. La violencia como hecho cotidiano se ha tratado de cuantificar, describir y explicar, pero la bifurcación del fenómeno se torna caótica pues ¿qué caminos tomar si los espacios sociales están oscurecidos por la violencia? ¿cómo convivir en espacios sociales transversalizados y circunscritos constantemente en accionares que no son ajenos al uso de la violencia?

A su vez, lo caótico de este hecho radica en que no solo se debe tratar de entender individualmente los casos que pueden ser expresión de la violencia, sino el abordaje de un contexto sociocultural y político que impide su resolución o que en la mayoría de los casos invisibiliza la violencia o la vuelve impune.

Para enfatizar lo dicho, citemos algunas cifras que cobran importancia en ese contexto:

El Instituto Igarapé de Brasil, quien mapea las tasas de homicidios a nivel global, pudo arrojar como data que para los años 2016 y 2017, las tasas de El Salvador fueron de 81 y 60, respectivamente. Siendo el país con las mayores tasas de homicidios para América Latina.

Por otra parte, Venezuela para los años 2016 y 2017 contó con una tasa de homicidios de 70 y 62, respectivamente. Esto según los reportes del Ministerio Público (2016) y del investigador Keymer Ávila (2018).

Lo siguiente arroja como resultado que Venezuela para el año 2017 superaría la tasa del

mismo año de El Salvador, país cuya tasa de homicidios se reporta como una de las más altas de la región y del mundo, en un contexto de violencia que no es ajeno a un país signado por los conflictos desde la época de la guerra civil.

No obstante, en la cotidianidad del día a día la violencia también se refleja en otro tipo de indicadores que dan cuenta de su inexorable presencia.

Desde la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin) se está construyendo una base de datos que muestra la proporción de casos tipificados y reportados como sucesos producto de balas perdidas. Este fenómeno comúnmente conocido como *balas perdidas* tiene un impacto significativo sobre la letalidad de las muertes relacionadas con la violencia armada.¹

En los primeros hallazgos reportados y sobre los datos sistematizados en prensa desde los años 2014-2018 hemos podido identificar 207 personas fallecidas y 121 lesionados. Esto sobre la base del registro de 226 casos, lo cual se traduce, a su vez, en 63,11 % de fallecidos y 36,89 % de individuos lesionados, únicamente en sucesos que han podido ser contabilizados e inscritos en la categoría de balas perdidas para el período de muestra seleccionado.

Por otra parte, vemos con preocupación cómo, también, desde la esfera política se empieza accionar una estrategia de control social de los territorios, amparada en la violencia ejercida contra los más pobres. Una *razzia* de tinte militar que comenzó con las OLP (Operativos de Liberación del Pueblo) en el año 2015 y que se extiende hoy en día a los diversos procedimientos de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales).

Es innegable la constante presencia del FAES en los sectores más empobrecidos de la sociedad venezolana, con procedimientos caracterizados por las ejecuciones extrajudiciales, allanamientos sin miramientos a cualquier disposición legal sobre dicho procedimiento, incremento del amedrentamiento y del miedo. Sin olvidar el grupo mayoritario de víctimas que producen dichos operativos, hombres jóvenes de extracción popular.

Ante la dificultad de un problema que se generaliza y asume expresiones diferentes, nos acercamos a la fragilidad del tejido social, del sujeto y su dependencia del contexto de relaciones enmarcadas en la ya caótica bifurcación de la violencia.

EL PAPEL DEL ESTADO Y LOS ACTORES SOCIALES EN LA LÓGICA DE LA VIOLENCIA

Consideramos que hay un punto de quiebre relacionado con la reproducción y exacerbación de la violencia. Esta inflexión proviene de la “militarización de la seguridad ciudadana”.

Keymer Ávila, en su artículo “Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP): entre las ausen-

cias y los excesos del sistema penal en Venezuela” (2017) expone en primer lugar la diferenciación que debe existir entre la seguridad de la nación y la seguridad ciudadana. El primer término, implica la noción de la soberanía y el cuidado de las fronteras físicas, teniendo como órganos encargados de dicha misión a los miembros de las fuerzas armadas. Los militares, por tanto, activan una lógica relacional bélica, que no es otra más que la existencia dicotómica entre amigos y enemigos. Por tanto, referencia inequívoca a la destrucción y aniquilación del oponente.

En lo que respecta a la noción de la seguridad ciudadana, los delitos, que son la máxima expresión de los conflictos que se dan entre civiles

y los órganos encargados de dirimirlos, deben ser revertidos a través de las sanciones y procedimientos estipulados en las leyes, y quienes los cometen deben ser procesados y tratados bajo lo estipulado en dichas formas.

Lo grave para el cuerpo social es la derivación en la práctica de un grupo de consecuencias que proviene del entremezclamiento de estas lógicas. Pues si se diseña una política con una noción militarizada de la seguridad se introduce el tratamiento de los sujetos sociales como si fuesen seres carentes de derechos; son el enemigo a vencer y aniquilar. Así, bajo la noción de protección a la ciudadanía en la lucha a la criminalidad, quedan autorizadas las ejecuciones extrajudiciales.

Por tanto, no es de extrañar las cifras de muertes violentas perpetradas por fuerzas del orden público en la lógica operativa de estos esquemas.

Las investigadoras Zubillaga y Hanson (2018) han rescatado unas cifras que son muy significativas para dar una visión de la magnitud de la violencia letal expresada en estas ejecuciones. Ellas indican que Venezuela es un país que cuenta con 31 millones de habitantes, pero para el año 2016 las fuerzas del orden mataron a 4 mil 667, por lo que el Estado se constituye en el responsable de 21 % de las muertes violentas.²

Paradójicamente, para el año analizado los cuerpos de seguridad en Brasil fueron responsables de 4 mil 219 muertes, lo que en porcentajes se traduce en la autoría del 7 % de las muertes violentas. Esto en términos comparativos representa una proporción tres veces más elevada, ya que Brasil cuenta con una población de 207 millones de habitantes. Resalta a su vez, el hecho de que Brasil cuenta con una policía caracterizada como una de las más violentas del mundo.

Más allá de lo dantesco de la cifra, los números revelan unas implicaciones sobre las lógicas relacionales, tejido social y accionar de nuestra cotidianidad. ¿Qué implicaciones tiene todo esto y cómo se traduce en nuestra forma de concebir nuestra sociedad?

A mi juicio, existen tres graves consecuencias que se derivan de lo ya descrito: la primera de ellas se traduce en el *recrudescimiento de la violencia*, que incrementa su letalidad. La espiral de violencia se reactiva y recrudece ya que los miembros de los grupos armados toman la señal emitida por las fuerzas del orden como una declaración de guerra en la que no queda otra salida que el ejercicio de la confrontación armada.

En segunda instancia, este tratamiento *incrementa la conflictividad social* pues dentro de la narrativa oficial se instaura una legitimación de la violencia contra ciertos actores sociales. La idea de que el orden y la seguridad solo puede ser garantizada mediante una lógica del exterminio del enemigo se filtra en el tejido social



LIBERTAD DIGITAL



800 NOTICIAS

mediante un discurso por parte del Estado que ampara y legitima estas acciones.

Por otra parte, esto termina por incidir en una reproducción de esta narrativa mediante la apropiación social de esta violencia discursiva con la que representamos y negamos al otro.

En tercer lugar, si el Estado legitima el uso excesivo de la fuerza, la violencia se instaura en el manejo de las relaciones sociales como un mecanismo de resolución de conflictos. *¿Si el Estado legitima el uso de esta violencia extrema quién está exento de introducir la violencia en sus relaciones y espacios sociales?*

Nuevamente nos encontramos frente al reto de la bifurcación de la violencia.

¿QUÉ HACER Y CÓMO REDEFINIRNOS?

Quizá de lo expuesto se vislumbre una desesperanza en cuanto al qué hacer y cómo manejarnos en relación a la violencia que nos aqueja como sociedad.

No obstante, nuestro país no es una excepción histórica en referencia a la complejidad y devastación que la violencia produce en las sociedades. Sin embargo, han existido acciones que inciden en la reducción de tales niveles.

Es preponderante tener un enfoque orientado a la integralidad de las políticas y a la distinción de los elementos estructurales y coyunturales que inciden en la conformación del fenómeno.

Una de las medidas que con suma necesidad debe retomar el Estado venezolano es el rediseño de una política efectiva de control de armas. Se debe crear una estrategia efectiva para el control de los elementos situacionales de la violencia (acceso y distribución de las armas de fuego).

Como ya se indicó, el acceso indiscriminado y disposición de las armas incrementa los niveles de letalidad de la violencia. Y si aunamos a esto los efectos expuestos por las lógicas imperantes de la violencia, es indispensable atender este punto como una política prioritaria dentro de una agenda en materia de seguridad ciudadana que aborde dichas nociones.

De igual manera es necesario crear un sistema de atención y reparación de las víctimas de la violencia (tanto de la violencia social, policial y política), ya que no se puede seguir invisibilizando los casos de violencia bajo un tratamiento impune. Este sistema debe crear los mecanismos necesarios para atender a las víctimas de manera adecuada, oportuna y sostenida en el tiempo.

A su vez es primordial la creación de oportunidades de formación, recreación y participación social para los más jóvenes, población sobre la que se cierne la amenaza de la violencia, ya sea en calidad de víctimas o de futuros victimarios.

Por otra parte, el Estado debería direccionarse a la revisión de las políticas sociales enfocadas en el tratamiento de los condicionantes estructurales de la violencia y guiar el trabajo policial que se hace en las comunidades más empobrecidas, con la intención de no generar una suerte de criminalización de las mismas o minimizar el uso de las políticas represivas dentro de estas.

Conjuntamente con este tipo de políticas de Estado, el trabajo de abordaje de la violencia también debe partir de las diferentes esferas que conforman la sociedad civil.

Hemos dicho que la violencia también se vivencia en las formas relacionales, en los discursos, sobre la base de nuestra cotidianidad y en el cuerpo social de la nación. En este punto se debe empezar a introducir las nociones políticas del tratamiento del otro. Esa comprensión de la política como el espacio de diálogo con el otro y del hacer en lo público.

Por ende, estos sectores (comunidades, académicos) deben tener como una tarea indispensable el registro y sistematización de las violaciones a los derechos fundamentales e hitos de la violencia experimentada. Sobre esta idea, la sociedad civil tiene que realizar un trabajo organizado y en red en la que se incluya la visión y realidad de las comunidades en torno a la violencia.

Si queremos vivir en paz debemos trabajar en la redefinición de nuestro tejido social y en las formas relacionales con las que hemos convivido. Esto entraña una creación y recreación de espacios alternativos y a favor de la convivencia pacífica, así como del respeto y protección a la vida.

Finalmente de eso se trata, de *ser sociales y sociedad*.

*Investigador asociado en el área de estudios de Violencia Urbana en Reacin.

NOTAS:

- 1 Esta investigación de Reacin se encuentra en curso y se suscribe al *Estudio sobre el impacto de la proliferación de armas de fuego, las economías ilícitas y la militarización de la seguridad ciudadana en la ocurrencia de homicidios en Venezuela* (actualmente en desarrollo).
- 2 Para mayor referencia revisar el texto de Zubillaga, Verónica y Hanson, Rebecca. "Del punitivismo carcelario a la matanza sistemática". Publicado en *Revista M.*, Río de Janeiro, V. 3, n° 5, p 32-52, jun. 2018.